

No. 48225*

**Mexico
and
Costa Rica**

Treaty on extradition and mutual judicial assistance in criminal matters between the United Mexican States and the Republic of Costa Rica. San José, 13 October 1989

Entry into force: 24 March 1995 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 41

Authentic text: Spanish

Registration with the Secretariat of the United Nations: Mexico, 6 January 2011

*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.

**Mexique
et
Costa Rica**

Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre les États-Unis du Mexique et la République de Costa Rica. San José, 13 octobre 1989

Entrée en vigueur : 24 mars 1995 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 41

Texte authentique : espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Mexique, 6 janvier 2011

* Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.

[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

TRATADO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN
MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Costa Rica,

CONSCIENTES de los estrechos vínculos existentes entre
ambos pueblos;

DESEOSOS de promover una mayor cooperación entre los
dos países en todas las áreas de interés común y convencidos de la
necesidad de prestarse asistencia mutua para proveer a la mejor
administración de justicia;

HAN RESUELTO concluir un Tratado de Extradición y
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.

TITULO I
EXTRADICION
ARTICULO 1

Las Partes Contratantes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y bajo las condiciones determinadas en los artículos siguientes, los individuos contra los cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta judicialmente como consecuencia de un delito.

ARTICULO 2

1. Darán lugar a la extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de libertad cuyo mínimo sea superior a un año.

2. Si la extradición se solicita para la ejecución de una sentencia se requerirá, además, que la parte de la pena que aún falte por cumplir no sea inferior a seis meses.

ARTICULO 3

También darán lugar a extradición, conforme al presente Tratado, los delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos países sean partes, y que estén debidamente incorporados al derecho interno de las Partes.

ARTICULO 4

1. La extradición no será concedida por delitos considerados como políticos por la parte requerida o conexos con delitos de esta naturaleza. A los fines de la aplicación de este Tratado, el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia no serán considerados como delito político.

2. Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tiene motivos para suponer que la solicitud de extradición motivada por un delito común ha sido presentada con la finalidad de perseguir o castigar a un individuo a causa de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o bien que la situación de este individuo pueda ser agravada por estos motivos.

ARTICULO 5

La extradición por delitos estrictamente militares queda excluida del campo de aplicación del presente Tratado.

ARTICULO 6

La infracción de las normas fiscales, sobre control de cambios y aduaneras, sólo dará lugar a la extradición en las condiciones previstas en este Tratado cuando las Partes así lo hubieren decidido por cada categoría de infracciones.

ARTICULO 7

1. Ninguna de las Partes Contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales.

2. Si el Estado requerido niega la extradición por motivo de nacionalidad someterá a solicitud del Estado requirente, el caso a las autoridades competentes para el procesamiento de la persona reclamada. En este caso se aplicará la legislación del Estado requerido. Si dicho Estado necesita documentos adicionales u otras pruebas, éstas se entregarán sin recargo alguno a aquel Estado. Se informará al Estado requirente sobre el resultado de la solicitud.

ARTICULO 8

La Parte requerida podrá denegar la extradición cuando, conforme a sus propias leyes, corresponda a sus tribunales conocer el delito por el cual aquella haya sido solicitada.

ARTICULO 9

La extradición no será concedida si el individuo ha sido ya juzgado por las autoridades de la Parte requerida por los mismos hechos que originaron la solicitud.

ARTICULO 10

No se concederá la extradición cuando la responsabilidad penal o la pena se hubiere extinguido por prescripción u otra causa, conforme a la legislación de cualquiera de las Partes.

ARTICULO 11

Si el delito que se imputa al reclamado es sancionado según la legislación de la Parte requirente, con la pena capital o con pena mayor al máximo establecido para la privación de la libertad en la legislación del país requerido, la extradición no se concederá a menos que se conmute la pena capital o la pena mayor por pena de prisión que no exceda la máxima prescrita por el país requerido.

ARTICULO 12

La persona objeto de extradición no podrá ser sometida en el territorio de la Parte requirente a un tribunal de excepción. No se concederá la extradición para ello ni para la ejecución de una pena impuesta por tribunales que tengan ese carácter.

ARTICULO 13

La solicitud de extradición será transmitida por la vía diplomática.

ARTICULO 14

Con la solicitud de extradición se enviarán:

a) Descripción circunstanciada de los hechos por los cuales la extradición se solicita, indicando en la forma más exacta posible el tiempo y lugar de su perpetración y su calificación legal;

b) Original o copia auténtica de sentencia condenatoria, orden de aprehensión, auto de prisión o cualquier otra resolución judicial de la que se desprenda la existencia del delito y los indicios racionales de la participación del reclamado;

c) Copia auténtica de las disposiciones legales relativas al delito o delitos de que se trate, penas correspondientes o plazos de prescripción;

d) Datos que permitan establecer la identidad y la nacionalidad del individuo reclamado y, siempre que sea posible, los conducentes a su localización.

ARTICULO 15

Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición son insuficientes o defectuosos, la Parte requerida pondrá en conocimiento de la requirente las omisiones o defectos para que puedan ser subsanados en los dos meses siguientes.

ARTICULO 16

1. El individuo entregado en virtud de extradición no será procesado, juzgado o detenido para la ejecución de una pena por un hecho anterior y diferente al que hubiese motivado la extradición, salvo en los casos siguientes:

a) Cuando la Parte que lo ha entregado preste su consentimiento, después de la presentación de una solicitud en este sentido, que irá acompañada de los documentos previstos en el artículo 15 y de un testimonio judicial conteniendo las declaraciones del inculpado. El consentimiento será otorgado cuando la infracción por la que se solicita, origine la obligación de conceder la extradición según este Tratado;

b) Cuando estando en libertad de abandonar el territorio de la Parte a la que fue entregado, el inculpado haya permanecido en él más de cuarenta y cinco días sin hacer uso de esa facultad.

2. Cuando la calificación o clasificación del hecho imputado sea modificada en el curso del procedimiento, el individuo entregado sólo será procesado o juzgado en el caso de que los elementos constitutivos del delito, también hubieren permitido la extradición.

ARTICULO 17

Salvo en el caso previsto en el párrafo b) del apartado 1. del artículo 16 la reextradición en beneficio de un tercer Estado será otorgada con el consentimiento de la Parte que ha concedido la extradición. Esta podrá exigir el envío previo de la documentación prevista en el artículo 14, así como un acta que contenga la declaración razonada del reclamado sobre si acepta la extradición o se opone a ella.

ARTICULO 18

1. En caso de urgencia, las autoridades competentes de la Parte requirente podrán solicitar la detención preventiva del individuo reclamado. La solicitud de detención preventiva indicará la existencia de una de las resoluciones mencionadas en el apartado b) del artículo 14 y la intención de formalizar la solicitud de extradición. Mencionará igualmente el delito, el tiempo, el lugar en que ha sido cometido y los datos que permiten establecer la identidad y nacionalidad del individuo reclamado.

2. La solicitud de detención preventiva será transmitida a las autoridades competentes de la Parte requerida, por la vía más rápida, pudiendo utilizar cualquier medio de comunicación siempre que deje constancia escrita.

3. Al recibo de la solicitud a que se refiere el apartado 1, la Parte requerida adoptará las medidas conducentes a obtener la detención del reclamado. La Parte requirente será informada del curso de su solicitud.

4. La detención preventiva deberá revocarse si en el plazo de dos meses la Parte requirente no ha formalizado la solicitud de extradición aportando los instrumentos mencionados en el artículo 14.

5. La revocación de la detención preventiva no impedirá el curso normal del procedimiento de extradición si la solicitud y los documentos mencionados en el artículo 4 llegan a recibirse posteriormente.

ARTICULO 19

Si la extradición se solicita en forma concurrente por una de las Partes y otros Estados, bien por el mismo hecho o por hechos diferentes, la Parte requerida resolverá teniendo en cuenta especialmente la gravedad relativa a los hechos, el lugar de los delitos, las fechas de las respectivas solicitudes, la nacionalidad del individuo y la posibilidad de una extradición ulterior. Siempre se dará preferencia a la solicitud presentada por un Estado con el cual exista un tratado de extradición.

ARTICULO 20

1. La Parte requerida comunicará a la requirente, por la vía diplomática, su decisión respecto a la solicitud de extradición.

2. Toda negativa total o parcial será motivada.

3. Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para realizar la entrega del reclamado, que deberá llevarse a efecto dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que la Parte requirente haya recibido la comunicación a que se refiere el apartado 1.

4. Si el reclamado no ha sido recibido dentro del plazo señalado, será puestado en libertad y la Parte requerida podrá posteriormente denegar la extradición por el mismo delito.

ARTICULO 21

1. La Parte requerida podrá después de haber resuelto sobre la solicitud de extradición, retrasar la entrega del individuo reclamado a fin de que pueda ser juzgado o, si ya ha sido condenado, para que pueda cumplir en su territorio una pena impuesta por un hecho diferente de aquel por el que se concedió la extradición.

2. En lugar de retrasar la entrega, la Parte requerida también podrá entregar temporalmente al reclamado, si su legislación lo permite, en las condiciones que de común acuerdo establezcan ambas Partes.

3. La entrega podrá igualmente ser diferida cuando, por las condiciones de salud del reclamado, el traslado pueda poner en peligro su vida o agravar su estado.

ARTICULO 22

1. A petición de la Parte requirente, la requerida asegurará y entregará, en la medida en lo que lo permita su legislación y sin perjuicio de los derechos de terceros los objetos:

a) que puedan servir de medios de prueba;

b) que, provenientes de la infracción, fuesen encontrados en poder del reclamado en el momento de su detención o descubiertos posteriormente.

2. La entrega de los objetos citados en el apartado anterior será efectuada aunque la extradición ya acordada no pueda llevarse a cabo por muerte, desaparición o fuga del individuo reclamado.

3. La Parte requerida podrá retener temporalmente o entregar bajo condición de restitución los objetos a que se refiere el apartado 1 cuando puedan quedar sujetos a una medida de aseguramiento en el territorio de dicha Parte dentro de un proceso penal en curso.

4. Cuando existan derechos de la Parte requerida o de terceros sobre objetos que hayan sido entregados a la requirente para los efectos de un proceso penal, conforme a las disposiciones de este artículo, dichos objetos serán restituidos a la Parte requerida lo más pronto posible y sin costo alguno.

ARTICULO 23

1. El tránsito por el territorio de una de las Partes de una persona que no sea nacional de esa Parte, entregada a la otra Parte por un tercer Estado, será permitido mediante la presentación por la vía diplomática de una copia auténtica de la resolución por la que se concedió la extradición siempre que no se opongan razones de orden público.

2. Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la custodia del reo mientras permanezca en su territorio.

3. No se requerirá tal autorización cuando se use la vía aérea y no se haya previsto ningún aterrizaje en territorio de la otra Parte contratante.

4. La Parte requirente reembolsará al Estado de tránsito cualquier gasto de que éste incurra con tal motivo.

ARTICULO 24

Los gastos ocasionados por la extradición en el territorio de la Parte requerida serán por su cuenta, excepto los relativos al transporte del reclamado que recaerán sobre la Parte requirente.

TITULO II

ASISTENCIA MUTUA

ARTICULO 25

1. Las Partes se obligan a prestarse asistencia mutua, según las disposiciones de este Tratado en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal incoado por hechos cuyo conocimiento compete a la Parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada.

2. Este Tratado no se aplicará en casos de contravenciones o faltas, ni tampoco a los delitos políticos o sujetos a la jurisdicción militar.

3. Para la ejecución de medidas de aseguramiento de objetos, de cateo, de allanamiento, o registro domiciliarios será necesario que el hecho sea también considerado como delito por la legislación de la Parte requerida.

ARTICULO 26

La asistencia judicial podrá ser rehusada:

a) Si la solicitud se refiere a infracciones políticas, conexas con infracciones de este tipo, a juicio de la Parte requerida o infracciones fiscales;

b) Si la Parte requerida estima que el cumplimiento de la solicitud atenta contra su orden público.

ARTICULO 27

El cumplimiento de una solicitud de asistencia se llevará a cabo conforme a la legislación de la Parte requerida, limitándose a las diligencias solicitadas expresamente.

ARTICULO 28

1. La Parte requerida cumplimentará las cartas o comisiones rogatorias relativas a un procedimiento penal que le sean dirigidas por las autoridades judiciales o por el Ministerio Público de la Parte requirente y que tengan por objeto actos de averiguación previa o instrucción o actos de comunicación.

2. Si la carta o comisión rogatoria tiene por objeto la transmisión de autos, objetos, elementos de prueba y en general cualquier clase de documentos, la Parte requerida entregará solamente copias o fotocopias auténticas, quedando a discreción de la Parte requerida el envío de los originales a solicitud expresa de la Parte requirente.

3. Los objetos o documentos que hayan sido enviados en cumplimiento de una comisión rogatoria serán devueltos lo antes posible, a menos que la Parte requerida renuncie a ellos.

ARTICULO 29

Si la Parte requirente lo solicita expresamente será informada de la fecha y el lugar de cumplimiento de la comisión rogatoria.

ARTICULO 30

1. La Parte requerida entregará al destinatario las decisiones judiciales o documentos relativos a actos procesales que se le enviarán con dicho fin por la Parte requirente.

2. La entrega podrá ser realizada mediante el envío del documento al destinatario o mediante alguna de las formas previstas por la legislación de la Parte requerida o en cualquier otra forma compatible con dicha legislación a petición de la Parte requirente.

3. La entrega se acreditará mediante recibo fechado y firmado por el destinatario o por certificación de la autoridad competente que acredite el hecho, la forma y la fecha de entrega.

Este documento será enviado a la Parte requirente y si la entrega no pudo realizarse, se comunicará y se harán constar las causas.

4. La solicitud que tenga por objeto la citación de un inculpado, testigo o perito ante las autoridades de la Parte requirente podrá no ser diligenciada si es recibida dentro de los cuarenta y cinco días anteriores a la fecha señalada para la comparecencia. La Parte requirente deberá tener en cuenta este plazo al formular su solicitud.

ARTICULO 31

1. Si la Parte requirente solicitase la comparecencia ante sus autoridades como testigo o perito de una persona que se encuentre en el territorio de la otra Parte ésta procederá a la citación sin que puedan surtir efectos las cláusulas conminatorias o sanciones previstas para el caso de incomparecencia.

2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior deberá mencionar el importe y forma de pago de los viáticos, dietas e indemnizaciones que percibirá el testigo o perito.

ARTICULO 32

Si la Parte requirente estima que la comparecencia personal de un testigo o perito ante sus autoridades resulta especialmente necesaria, lo hará constar en la solicitud de citación.

ARTICULO 33

1. El testigo o perito, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de una citación comparezca ante las autoridades de la Parte requirente, no podrá ser perseguido o detenido en este Estado por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida.

2. La inmunidad prevista en el precedente apartado cesará cuando el testigo o perito estando en libertad de abandonar el territorio permaneciere más de cuarenta y cinco días en el territorio de la Parte requirente después del momento en que su presencia ya no fuere exigida por las autoridades judiciales de dicha Parte.

ARTICULO 34

1. Si en una causa penal se considerase necesaria la comparecencia personal ante las autoridades judiciales de una de las Partes, en calidad de testigo o para un careo, de un individuo detenido en el territorio de la otra Parte, se formulará la correspondiente solicitud. Se accederá a ella si el detenido presta su consentimiento y si la Parte requerida estima que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.

2. La Parte requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla tan pronto como se haya realizado la diligencia especificada en la solicitud que dió lugar al traslado.

3. Los gastos ocasionados por la aplicación de este artículo correrán por cuenta de la Parte requirente.

ARTICULO 35

Las Partes se informarán mutuamente de las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra nacionales de la otra.

ARTICULO 36

Cuando una de las Partes solicite de la otra los antecedentes penales de una persona, haciendo constar el motivo de la petición, dichos antecedentes, le serán comunicados si no lo prohíbe la legislación de la Parte requerida.

ARTICULO 37

1. Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indicaciones:

- a) autoridad de que emana el documento o resolución;
- b) naturaleza del documento o de la resolución;
- c) descripción precisa de la asistencia que se solicita;
- d) delito a que se refiere el procedimiento;

e) en la medida de lo posible, identidad y nacionalidad de la persona encausada o condenada;

f) nombre y dirección del destinatario.

2. Las comisiones rogatorias que tengan por objeto cualquier diligencia distinta de la simple entrega de documentos mencionarán además la acusación formulada y contendrán una sumaria exposición de los hechos.

3. Cuando una solicitud de asistencia no sea cumplimentada por la Parte requerida, ésta la devolverá con expresión de la causa.

ARTICULO 38

1. A efecto de lo determinado con este Tratado, cada Parte designará las autoridades para enviar y recibir las comunicaciones relativas a la asistencia en materia penal.

2. No obstante lo anterior, las Partes podrán utilizar en todo caso la vía diplomática o encomendar a sus Cónsules la práctica de diligencias permitidas por la legislación del Estado requerido.

TITULO III
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 39

Los documentos transmitidos en aplicación de este Tratado estarán dispensados de todas las formalidades de legalización cuando sean cursados por la vía diplomática o por conducto de las autoridades a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.

ARTICULO 40

Cualquier diferencia derivada de la aplicación del presente Tratado será resuelta por las Partes por la vía diplomática.

ARTICULO 41

1. El presente Tratado está sujeto a ratificación. El Canje de los Instrumentos de Ratificación tendrá lugar en la Ciudad de México a la brevedad posible.

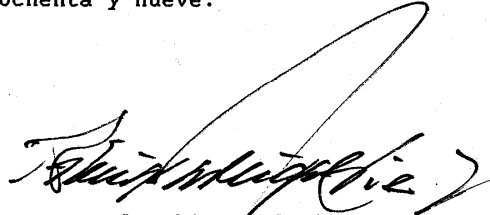
2. El presente Tratado entrará en vigor en la fecha en que tenga lugar el Canje de los Instrumentos de Ratificación y seguirá en vigor mientras no sea denunciado por una de las Partes. Sus efectos cesarán seis meses después del día de recepción de la denuncia.

3. Las extradiciones solicitadas después de la entrada en vigor del presente Tratado se regirán por sus cláusulas, cualquiera que sea la fecha de comisión del delito.

Hecho en dos originales en idioma español, igualmente auténticos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, a los trece días del mes de octubre del año mil novecientos ochenta y nueve.



Por el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos



Por el Gobierno de la
República de Costa Rica



[TRANSLATION – TRADUCTION]

TR/060111/I-48225

page 1 de 6 pages

12-50902

Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre les États-Unis du Mexique et la République de Costa Rica

Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République du Costa Rica,

Conscients des liens d'amitié étroits existants entre les deux peuples,

Animés du désir de renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines d'intérêt commun et convaincus de la nécessité d'une entraide en vue d'une meilleure administration de la justice,

Décident de conclure un Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale.

Titre premier. Extradition

Article premier

Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et dans les conditions définies aux articles suivants, les individus contre lesquels une procédure pénale est en cours ou ceux qui sont recherchés aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté imposée par la voie judiciaire suite à un délit.

Article 2

1. Donnent lieu à l'extradition les faits classés comme délits par la législation interne des deux Parties et qui sont passibles d'une peine privative de liberté, dont la durée maximale ne peut pas être inférieure à un (1) an.
2. Si l'extradition est demandée pour l'exécution d'un jugement, il est en outre requis que la partie de la peine encore non subie ne soit pas inférieure à six (6) mois.

Article 3

Donnent également lieu à l'extradition, conformément aux dispositions du présent Traité, les délits compris dans des conventions multilatérales auxquelles les deux pays sont parties et qui font dûment partie du droit interne des Parties.

Article 4

1. L'extradition n'est pas accordée pour des faits délictuels considérés comme politiques par la Partie requise ou pour des faits connexes à des délits de cette nature. Aux effets de l'application du présent traité, l'homicide ou autre attentat à la vie, à l'intégrité physique ou à la liberté d'un chef d'État ou de gouvernement ou d'un membre de sa famille n'est pas considéré comme un délit politique.
2. L'extradition n'est pas non plus accordée s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour un délit de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne puisse être aggravée pour ces mêmes raisons.

Article 5

L'extradition pour des délits d'ordre purement militaire est exclue du champ d'application du présent Traité.

Article 6

Les délits fiscaux relatifs au contrôle des changes et douaniers donnent lieu à extradition uniquement aux conditions prévues dans le présent Traité lorsque les Parties en ont ainsi décidé pour chaque catégorie d'infraction.

Article 7

1. Aucune des Parties n'a l'obligation d'extrader ses ressortissants.

2. Si l'État requis rejette l'extradition au motif qu'il s'agit d'un ressortissant, celui-ci soumet l'affaire, à la demande de la Partie requérante, à ses autorités compétentes en vue d'entamer les poursuites concernant la personne réclamée. Dans ce cas, la législation de l'État requis sera d'application. Si l'État en question a besoin de documents additionnels ou d'autres éléments de preuves, ceux-ci lui seront transmis sans frais supplémentaires. Ce dernier informe la Partie requérante de l'issue de la demande.

Article 8

La Partie requise peut refuser l'extradition lorsque, conformément à sa propre législation, ses tribunaux ont compétence pour juger le délit qui a motivé la demande d'extradition.

Article 9

L'extradition n'est pas accordée si l'individu a déjà été jugé par les autorités de la Partie requise pour les mêmes faits que ceux qui sont à l'origine de la demande.

Article 10

L'extradition n'est pas accordée si la responsabilité pénale ou la peine sont arrivées à prescription ou pour tout autre motif conforme à la législation de l'une ou l'autre des Parties.

Article 11

Lorsque le fait délictuel qui est à l'origine de la demande d'extradition de la personne réclamée est passible, selon la législation interne de la Partie requérante, de la peine de mort ou d'une peine supérieure au maximum établi pour la privation de liberté dans la législation du pays requis, l'extradition est uniquement accordée si la peine capitale ou la peine maximale est transformée en une peine de prison ne dépassant pas le maximum établi par le pays requis.

Article 12

L'individu dont l'extradition est demandée ne peut pas être soumis sur le territoire de la Partie requérante à un tribunal d'exception. L'extradition n'est pas accordée dans ce cas ni pour l'exécution d'une peine imposée par des tribunaux de ce genre.

Article 13

La demande d'extradition est transmise par la voie diplomatique.

Article 14

1. La demande d'extradition doit s'accompagner de :

a) Une description circonstanciée des faits pour lesquels l'extradition est demandée, en indiquant le plus précisément possible le lieu et la date où ils ont été commis et leur qualification juridique;

b) Le document original et une copie certifiée conforme du jugement condamnatore, l'ordre d'appréhension, le mandat d'arrêt ou toute autre résolution judiciaire qui indique l'existence du délit et d'indices rationnels de sa perpétration par la personne réclamée;

c) Une copie certifiée conforme des dispositions légales relatives au délit ou aux délits concernés, aux peines applicables et aux délais de prescription;

d) Les données qui permettent d'établir l'identité et la nationalité de l'individu réclamé et, si possible, les autres moyens permettant sa localisation.

Article 15

Si la Partie requise estime que les données et les documents présentés à l'appui de la demande d'extradition sont insuffisants ou qu'ils sont erronés, elle doit signaler à la Partie requérante les omissions ou les erreurs afin que cette dernière puisse y remédier dans un délai de deux mois.

Article 16

1. L'individu extradé ne sera pas jugé, condamné ou soumis à toute restriction de sa liberté personnelle aux fins d'exécution d'une peine pour des faits antérieurs distincts de ceux qui ont motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsque la Partie qui l'a remis donne son consentement, après présentation d'une demande dans ce sens, accompagnée des documents prévus à l'article 15 et d'un témoignage judiciaire reprenant les déclarations de l'inculpé. Elle accorde son consentement si l'infraction qui fait l'objet de la demande entraîne une obligation de concéder l'extradition en vertu des termes du présent Traité;

b) Si l'individu inculpé, alors qu'il a la faculté de sortir du territoire de la Partie vers laquelle il a été extradé, est resté dans le pays plus de quarante-cinq (45) jours sans faire usage de cette faculté;

2. Lorsque la qualification ou la classification de l'acte imputé est modifiée durant la procédure, l'individu extradé ne peut être poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs du délit auraient également permis l'extradition.

Article 17

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 16, l'individu extradé ne peut être réextradé vers un pays tiers qu'avec le consentement de la Partie qui a accordé l'extradition. Cette dernière peut exiger l'envoi préalable des documents stipulés à l'article 14 ainsi que de l'acte qui contient la déclaration motivée de l'individu réclamé qui indique s'il accepte la réextradition ou s'il s'y oppose.

Article 18

1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent demander la détention préventive de la personne dont l'extradition est demandée. La demande de détention préventive doit indiquer l'existence d'une des résolutions mentionnées à l'alinéa b de l'article 14 et l'intention d'officialiser la demande d'extradition. Elle doit également mentionner le délit, le moment et le lieu où il a été commis ainsi que les données qui permettent d'établir l'identité et la nationalité de l'individu réclamé.

2. La demande de détention préventive doit être transmise aux autorités compétentes de la Partie requise par la voie la plus rapide, n'importe quel moyen de communication pouvant être utilisé pour autant qu'il laisse une trace écrite.

3. Sur réception de la demande visée au paragraphe 1, la Partie requise prend les mesures nécessaires pour mettre en détention la personne dont l'extradition est demandée et elle notifie à la Partie requérante la suite donnée à sa demande.

4. La détention préventive doit être révoquée si, dans un délai de deux mois, la Partie requérant n'a pas officialisé la demande d'extradition en fournissant les documents mentionnés à l'article 14.

5. La révocation de la détention préventive n'empêche pas le déroulement normal de la procédure d'extradition, pour autant que la demande et les documents mentionnés à l'article 14 soient reçus par la suite.

Article 19

Si l'extradition d'une même personne est demandée concurremment par l'une des Parties et d'autres États, soit pour la même infraction soit pour des infractions différentes, la Partie requise prendra sa décision compte tenu en particulier de la gravité relative des infractions et du lieu où elles ont été commises, des dates respectives des demandes, de l'existence de traités d'extradition, de la nationalité de l'individu réclamé ainsi que de la possibilité de procéder ultérieurement à l'extradition à l'autre État. La préférence sera toujours donnée à une demande présentée par un État avec lequel il existe un traité d'extradition.

Article 20

1. La Partie requise communique à la Partie requérante, par la voie diplomatique, sa décision concernant la demande d'extradition.

2. Tout refus, total ou partiel, doit être justifié.

3. Si l'extradition est accordée, les Parties se mettent d'accord sur la manière de procéder à la remise de la personne, laquelle doit être livrée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date à laquelle la Partie requérante a reçu la communication visée au paragraphe 1.

4. Si la personne dont l'extradition est demandée n'est pas livrée dans le délai indiqué, elle est mise en liberté et la Partie requise peut, par la suite, refuser son extradition pour le même délit.

Article 21

1. Après avoir tranché sur la demande d'extradition, la Partie requise peut différer la remise de la personne dont l'extradition est demandée afin que celle-ci puisse être jugée ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger sur son territoire une peine imposée pour un délit différent de celui pour lequel l'extradition a été accordée.

2. Au lieu de différer la remise de la personne, la Partie requise peut également livrer temporairement la personne dont l'extradition est demandée, si la législation le permet, aux conditions établies de commun accord par les deux Parties.

3. La Partie requise peut également différer la remise de la personne dont l'extradition est demandée lorsque l'état de santé de celle-ci est tel que le transfert pourrait mettre sa vie en danger ou aggraver son état.

Article 22

1. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise conserve et remet, dans la mesure autorisée par sa législation et sans préjudice des droits de tiers, les objets :

a) qui peuvent servir de pièces à conviction;

b) qui, provenant du délit, auraient été trouvés en possession de la personne réclamée au moment de sa détention ou qui ont été découverts par la suite.

2. Les objets mentionnés au paragraphe précédent sont remis même si l'extradition, après avoir été accordée, ne peut avoir lieu pour cause de décès, de disparition ou d'évasion de la personne réclamée.

3. Si les objets mentionnés au paragraphe 1 sont soumis à une mesure de conservation sur le territoire de la Partie requise, dans le cadre d'une procédure pénale en cours, celle-ci peut les garder provisoirement ou les remettre sous réserve de restitution.

4. Lorsque la Partie requise ou des tiers a des droits sur les objets remis à la Partie requérante dans le cadre d'une procédure pénale, conformément aux dispositions du présent article, ces objets sont restitués à la Partie requise dès que possible et sans frais.

Article 23

1. Le transit par le territoire de l'une des Parties d'un individu qui n'est pas ressortissant de cette Partie et qui est remis à l'autre Partie par un pays tiers est autorisé, à condition que ne s'y opposent pas des motifs d'ordre public, sur transmission par la voie diplomatique d'une copie conforme de la décision d'extradition.

2. La garde de l'individu réclamé incombe aux autorités de l'État de transit pendant qu'il séjourne sur son territoire.

3. L'autorisation ne sera pas exigée en cas d'utilisation de la voie aérienne ou si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'autre Partie contractante.

4. La Partie requérante remboursera à l'État de transit les dépenses encourues à cet effet.

Article 24

La Partie requise prend en charge les frais occasionnés sur son territoire par l'extradition de la personne réclamée, à l'exception des frais relatifs à son transport qui sont assumés par la Partie requérante.

Titre II. Entraide

Article 25

1. Les Parties s'obligent à se prêter mutuellement assistance, conformément aux dispositions du présent Traité, dans le cadre d'enquêtes et de poursuites se rapportant à n'importe quelle procédure pénale engagée pour des faits relevant de la compétence de la Partie requérante au moment où l'aide est sollicitée.

2. Le présent Traité ne s'applique pas aux contraventions ou infractions ni aux délits politiques ou soumis au droit militaire.

3. Pour la mise à exécution de mesures de sécurisation, le fait à l'origine de la procédure doit également être considéré comme un délit dans la législation de l'État requis.

Article 26

1. L'entraide judiciaire demandée peut être refusée lorsque :

a) La demande se réfère à des délits considérés dans la Partie requise comme des délits politiques, des délits connexes à des infractions de cette nature ou des délits fiscaux;

b) L'exécution de la demande porte atteinte à l'ordre public de la Partie requise.

Article 27

Une demande d'entraide judiciaire est exécutée conformément à la législation de la Partie requise, en se limitant aux démarches expressément demandées.

Article 28

1. La Partie requise respectera les commissions rogatoires relatives à des procédures judiciaires menées par les autorités judiciaires ou par le ministère public de la Partie requérante et visant des actes de l'enquête préliminaire ou de l'instruction ou des actes de communication.

2. Si la commission rogatoire a pour but la transmission de pièces, d'objets, d'éléments de preuve et, généralement, de toute catégorie de document, la Partie requise ne remettra que des copies ou des photocopies certifiées, l'envoi des originaux à la demande expresse de la Partie requérante restant à la discrétion de la Partie requise.

3. Les objets ou documents qui ont été envoyés en vertu d'une commission rogatoire seront restitués le plus rapidement possible, à moins que la Partie requise n'y renonce.

Article 29

A sa demande expresse, la Partie requérante est tenue informée de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire.

Article 30

1. La Partie requise communiquera au destinataire les décisions judiciaires ou documents relatifs à des actes de procédure que lui fera parvenir à cette fin la Partie requérante.

2. Les documents en question sont envoyés au destinataire ou peuvent lui parvenir de toute autre manière prévue par la législation de la Partie requise ou sous toute autre forme autorisée par la législation en question à la demande de la Partie requérante.

3. La remise est accréditée par le biais d'un reçu daté et signé par le destinataire ou par le biais de l'autorité compétente qui atteste du fait, de la date et des modalités de la remise des documents.

Ce document est envoyé à la Partie requérante et, si la remise n'a pu avoir lieu, ses causes seront communiquées et un constat sera dressé.

4. La demande visant à faire comparaître un inculpé, un témoin ou un expert devant les autorités de la Partie requérante peut ne pas être diligentée si elle parvient dans les 45 jours avant la date indiquée pour la comparution. La Partie requérante doit tenir compte de ce délai en formulant sa demande.

Article 31

1. Si la Partie requérante demande qu'une personne qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie comparaisse comme témoin ou expert devant ses autorités, celle-ci cite la personne à comparaître sans que les clauses contraignantes ou les sanctions prévues en cas de non-comparution ne puissent avoir des effets.

2. La demande visée au paragraphe précédent doit renseigner le montant et le mode de paiement des indemnités et frais de déplacement qui seront perçus par le témoin ou l'expert.

Article 32

Si la Partie requérante estime que la comparution en personne d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités est indispensable, elle l'indiquera dans la citation à comparaître.

Article 33

1. Le témoin ou l'expert, quelle que soit sa nationalité qui, sur citation à comparaître, comparaît devant les autorités de la Partie requérante ne peut être poursuivi ou détenu dans cet État pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa sortie du territoire de la Partie requise.

2. L'immunité prévue au paragraphe précédent cesse dès lors que le témoin ou l'expert, alors qu'il a la faculté de sortir du territoire de la Partie requérante, est resté dans le pays plus de quarante-cinq (45) jours après le moment où sa présence n'est plus requise par les autorités judiciaires dans l'État en question.

Article 34

1. Si, dans une affaire pénale, il est jugé nécessaire que comparaisse en personne devant les autorités judiciaires de l'une des Parties, en qualité de témoin ou pour une confrontation, une personne détenue sur le territoire de l'autre Partie, une citation doit être établie à cette fin. Il y sera donné suite si le détenu donne son accord et si la Partie requise estime qu'il n'y a aucune considération majeure ne s'oppose au transfert.

2. La Partie requérante maintiendra la personne transférée sous surveillance et la remettra dès que les démarches établies dans la requête qui a donné lieu au transfert seront remplies.

3. Les frais occasionnés par l'application de cet article seront à la charge de la Partie requérante.

Article 35

Les Parties s'informent mutuellement des condamnations que les autorités judiciaires de l'une d'entre elles ont prononcées contre des ressortissants de l'autre Partie.

Article 36

Lorsque l'une des Parties demande à l'autre les antécédents judiciaires d'une personne, en exposant le motif de la requête, lesdits antécédents lui seront communiqués pour autant que la législation de la Partie requise le permette.

Article 37

1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :

- a) L'identification de l'autorité dont émane le document ou la résolution;
- b) La nature du document ou de la résolution;
- c) La description précise de l'aide demandée;
- d) Le délit visé par la procédure;
- e) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne mise en cause ou condamnée;
- f) Le nom et l'adresse du destinataire.

2. Les commissions rogatoires ayant pour objet toute autre démarche que la simple remise de documents indiqueront en outre l'accusation formulée et contiendront un exposé sommaire des faits.

3. Lorsque la demande d'entraide n'est pas dûment remplie par la Partie requise, celle-ci la retourne en la motivant.

Article 38

1. Aux fins des dispositions du présent Traité, chaque Partie désigne les autorités compétentes pour envoyer et recevoir les communications relatives à l'entraide en matière pénale.

2. Malgré ce qui précède, les Parties pourront recourir aux voies diplomatiques ou charger leurs consuls pour les démarches autorisées par la législation de l'État requis.

Titre III. Dispositions finales

Article 39

Les documents transmis dans le cadre du présent Traité sont dispensés de toutes les formalités de légalisation lorsqu'ils sont adressés par la voie diplomatique ou par l'intermédiaire des autorités visées au paragraphe 1 de l'article précédent.

Article 40

Tout différend découlant de l'application du présent Traité est réglé par les Parties par la voie diplomatique.

Article 41

1. Le présent Traité est soumis à ratification. L'échange des documents de ratification aura lieu en la ville de Mexico le plus rapidement possible.

2. Le présent Traité entre en vigueur à la date à laquelle sont échangés les documents de ratification et il reste en vigueur aussi longtemps qu'une des Parties ne le dénonce pas. Ses effets cessent six (6) mois après la date de réception de la dénonciation.

3. Les extraditions demandées après l'entrée en vigueur du présent Traité sont régies par ses clauses, quelle que soit la date à laquelle le délit a été commis.

Fait en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les deux textes faisant également foi, en la ville de San José, Costa Rica, le 13 octobre 1989.

Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique

Pour le Gouvernement de la République du Costa Rica